

capital que se le asigne en base al porcentaje de participación de cada socio en el capital de la Entidad.

Cuarto.—Las subvenciones al pago del recibo, para los seguros de contratación individual o colectiva, son incompatibles entre sí.

Quinto.—A efectos de la aplicación de la subvención de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios no se considerarán descuentos ni bonificaciones.

Sexto.—La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.

Madrid, 22 de mayo de 1987.—P. D., el Secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

16134 *ORDEN de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 657/1984, interpuesto por don Juan Perulles Moreno.*

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Perulles Moreno contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición deducido por el recurrente contra Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de fecha 27 de enero de 1984, se ha dictado por la Audiencia Territorial de Barcelona sentencia, ya firme, con fecha 17 de abril del año en curso, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administrativo número 657 de 1984, interpuesto por don Juan Perulles Moreno, contra la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda a que se contrae la presente litis, por no ser conformes a derecho y declaramos el derecho del actor a que pueda compatibilizar su puesto de trabajo como Interventor territorial en la Delegación de Hacienda de Lérida con la de Profesor adjunto interino de Derecho Financiero en la Universidad de Barcelona, Estudio General de Lérida, sin hacer expresa imposición de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Madrid, 22 de mayo de 1987.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

16135 *ORDEN de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone se cumpla en sus propios términos la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, en recurso número 217-219/1980, interpuesto por doña Francisca Pelayo Guzmán contra acuerdo del TEAC de 5 de febrero de 1980, relativo al Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, años 1970, 1971, 1972 y 1973.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada en 27 de enero de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla en recurso contencioso número 217-219/1980, interpuesto por doña Francisca Pelayo Guzmán, contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 5 de febrero de 1980, relativo al Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, años 1970, 1971, 1972 y 1973;

Resultando que la citada Audiencia se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105, párrafo 5.º de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Procurador don Eulalio Camacho Sáenz en nombre y representación de doña Francisca Pelayo Guzmán contra los acuerdos del Tribunal Económico-Administrativo Central de 22 de enero y 5 de febrero de 1980 debemos anular y anulamos los mismos por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, así como las liquidaciones del Impuesto General sobre la Renta de las

Personas Físicas de los ejercicios 1970 a 1973, ambos inclusive, que le fueron giradas a doña Francisca Pelayo Guzmán por la Delegación de Hacienda de Huelva y todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Madrid, 22 de mayo de 1987.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

16136 *ORDEN de 25 de mayo de 1987 por la que se amplía la habilitación del muelle de la Empresa «Terminal Internacional de Carbones de Gibraltar, Sociedad Anónima», en la Bahía de Algeciras para la descarga de fuel-oil en régimen de cabotaje.*

La Orden de 7 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de febrero de 1985), habilitó como punto de costa de quinta clase el muelle que en la Bahía de Algeciras tiene la Empresa «Terminal Internacional de Carbones de Gibraltar, Sociedad Anónima» (GIBRALTAR INTERCAR) para el tráfico de carbón en régimen de importación, exportación, transbordo y cabotaje.

La citada Empresa solicita de este Ministerio se amplíe dicha habilitación a la descarga de fuel-oil en régimen de comercio de cabotaje, con destino a la Central Térmica «Los Barrios», propiedad de la «Compañía Sevillana de Electricidad», amparándose en las concesiones otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y urbanismo para la explotación del terminal marítimo de su propiedad.

Visto el Decreto 3753/1964, así como el informe del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de Algeciras, Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se amplía la habilitación del muelle sito en la Bahía de Algeciras, propiedad de la Empresa «Terminal Internacional de Carbones de Gibraltar, Sociedad Anónima», para la descarga de fuel-oil en régimen de comercio de cabotaje, debiendo ser conducido desde el barco a través de un oleoducto hasta el depósito existente en la Central Térmica «Los Barrios».

Segundo.—El despacho en régimen de comercio de cabotaje se efectuará por personal y con documentación de la Aduana de Algeciras, quedando la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales facultada para dictar las normas que sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 25 de mayo de 1987.—P.D., el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

16137 *ORDEN de 26 de mayo de 1987 por la que se conceden a las Empresas que se citan los beneficios fiscales de la Ley 27/1984, de 26 de julio.*

Vista la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 3 de abril de 1987, por la que quedan aceptadas las solicitudes de inclusión en la zona de urgente reindustrialización del Nervión, de las Empresas que al final se relacionan, al amparo del Real Decreto 531/1985, de 17 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 24), prorrogado por el Real Decreto 2199/1986, de 17 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del 23). Todo ello de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 3 de abril de 1987;

Resultando que, los expedientes que se tramitan a efectos de concesión de beneficios fiscales se han iniciado en la fecha que figura en el apartado sexto de esta Orden, fecha en la que dichos beneficios se regían por la Ley 27/1984, de 26 de julio, y Real Decreto 531/1985, de 17 de abril, prorrogado por el Real Decreto 2199/1986, de 17 de octubre;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de beneficios España ha accedido a las Comunidades Económicas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión, de fecha 12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos, con fecha 1 de enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de concesión de beneficios fiscales solicitados, y que por otra parte la Ley 30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha de 1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores;

Vistos la Ley 27/1984, de 26 de julio; la Ley 30/1985, de 2 de agosto, relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 50/1985, de 23 de diciembre; Real Decreto 2586/1985, de 18 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de 1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de 1986